MANTEÍSTAS EN VALENCIA, 1707-1759.

Pere MOLAS RIBALTA

Universidad de Barcelona

En artículos anteriores he abordado desde distintas perspectivas el estudio de los magistrados de la Audiencia borbónica de Valencia¹. He analizado los naturales del propio reino de Valencia, los que habían estudiado en los famosos seis Colegios Mayores de las universidades de Castilla; he profundizado en los que sirvieron durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV, así como en el accidentado período de Fernando VII¹. Falta precisamente presentar aquellos magistrados de origen foráneo que no procedían de los colegios mayores, y a los que calificamos genéricamente como manteístas; y concretamente a los que fueron nombrados por Felipe V o por Fernando VI.

Los magistrados no colegiales

Entre los ocho magistrados procedentes de la Corona de Castilla que fueron nombrados en 1707 para integrar el nuevo tribunal borbónico, predominaban los colegiales mayores. Sólo dos pueden considerarse manteístas: Rodrigo Caballero, alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla, e Isidro de San Pedro, teniente de corregidor de Madrid. Pero esta tendencia inicial no se mantuvo. En los años siguientes fueron nombrados bastantes manteístas, algunos de ellos en sucesión de magistrados valencianos fallecidos². Los manteístas nombrados desde 1707 hasta el advenimiento de Carlos III fueron los siguientes.

1707	Rodrigo Caballero	Alcalde del Crimen.
1707	Isidro de San Pedro	Alcalde del Crimen.
1709	Manuel de Rigüero Andrade	Alcalde del Crimen.
1709	Francisco Velázquez Zapata	Fiscal.
1710	Francisco González Escobedo	Alcalde del Crimen.
1711	Diego Cosío Bustamante	Alcalde del Crimen.

1712	Antonio Cala de Vargas	Alcalde del Crimen-
1712	José Alcedo Campuzano	Oidor.
1712	Francisco Miravete Velasco	Oidor.
1713	Francisco Díez de Ulzurrun	Oidor.
1714	Juan Valcárcel Dato	Regente.
1714	Gaspar de Zevallos	Alcalde del Crimen.
1714	José Zenzano	Oidor.
1715	Cosme García Talón	Fiscal.
1715	José Martínez Talón	Fiscal.
1715	Andrés García Galeano	Alcalde del Crimen.
1716	Tomás Martínez Galindo	Fiscal.
1718	Francisco León Araujo	Fiscal.
1719	Juan Luis López Mesía	Fiscal.
1719	Cayo Prieto Laso de la Vega	Regente.
1720	Sebastián Sancho Abarca	Oidor.
1729	Luis Miranda Oquendo	Alcalde del Crimen.
1729	Alejandro González de Barcia	Oidor.
1730	José Benito de Salazar	Alcalde del Crimen.
1731	Manuel de Toledo	Regente.
1732	José Moreno Alvarado	Alcalde del Crimen.
1733	Lorenzo Santayana Bustillo	Fiscal.
1733	Blas Jover Alcázar	Alcalde del Crimen.
1735	Lorenzo Delgado Sanroman	Oidor.
1736	José Vicente Ferrer	Oidor.
1736	Pedro Valdés León	Alcalde del Crimen.
1737	José Moreno Hurtado	Oidor.
1741	Pedro Ric Ejea	Fiscal.
1741	Sebastián del Castillo	Alcalde del Crimen
1742	Miguel Eugenio Muñoz	Oidor.
1749	Pedro de la Torre	Fiscal.
1751	Eugenio Trevani	Fiscal.
1752	Jacinto Miguel de Castro	Fiscal.
1752	Juan Luis Novela Espínola	Alcalde del Crimen.
1756	Juan Vega Canseco	Fiscal.
1757	Juan Losada Temes	Alcalde del Crimen.

Hasta 1759 ingresaron en el tribunal un total de 37 magistrados procedentes de la Corona de Castilla, pero que no habían estudiado en los Colegios mayores, frente a 25 colegiales (seis de ellos en el cargo de regente). De aquellos, 14 ocuparon una de las cuatro plazas de alcaldes del crimen. Otros doce comenzaron su carrera en la Audiencia por una de las dos plazas de fiscal. Ocho fueron nombrados directamente para una plaza de oidor, y tres ejercieron las funciones de regente. Siete de los alcaldes del crimen y cuatro de los fiscales alcanzaron posteriormente un puesto de oidor de la misma Audiencia.

Cuatro de los nombrados no llegaron a formar parte del tribunal por haber alcanzado otra plaza antes de su toma de posesión. En 1709 Manuel de Riguero prefirió permanecer en su cargo de teniente de corregidor de Madrid. En 1715 José Zenzano fue nombrado para la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En 1730 Alejandro González de Barcia no tomó posesión, alegando razones de salud, mientras por otra parte solicitaba una plaza en la corte. En 1752, Eugenio Trevani fue destinado como oidor a la Chancillería de Granada.

Cargos de procedencia

¿Cual era la procedencia de los manteístas que recibían un nombramiento en el tribunal valenciano?

Ocho de ellos (y los cuatro que no tomaron posesión) procedían de otros tribunales, a veces en condición de supernumerarios: Francisco Miravete Velasco (1710) y Diego Cosío Bustamante (1711) en la Chancillería de Valladolid; José Alcedo Campuzano en la de Granada (1708); Sancho Abarca era alcalde del crimen honorario de la Audiencia de Sevilla (1709)³. Habían servido en la Audiencia de Sevilla el ya citado Rodrigo Caballero, y Tomás Martínez Galindo, fiscal de 1707 a 1716. Francisco Díez de Ulzurrun era oidor del Consejo real de Navarra. Sancho Abarca se incorporó al tribunal en 1720 procedente de la Audiencia de Cerdeña⁴. Tres procedían de la lejana Audiencia de Canarias: González de Barcia en 1729, José Moreno Hurtado en 1737 y Eugenio Trevani en 1751. Zenzano era fiscal de la Audiencia de Galicia.

Los magistrados procedentes de otra Audiencia predominaban entre los que obtuvieron directamente título de oidor.

Una parte de los magistrados manteístas provenía de la administración municipal. Habían sido corregidores o alcaldes mayores, como Isidro de San Pedro. Francisco González Escobedo había servido “desde muy mozo” diferentes alcaldías mayores en ciudades importantes (en Granada, Jaén, Cartagena, Málaga y León). También había sido corregidor en Molina de Aragón. Diego Cosío Bustamante había servido desde 1693 como corregidor (en Vivero, Soria, Orense y Alcalá de Henares). Gaspar de Zevallos había sido corregidor de Gibraltar (1691-1696) y de Huete (1697-1700), alcalde mayor de Segovia (1701-1704) y de nuevo corregidor en Alcaraz (1708-1712). Andrés García Galeano había sido corregidor de Medinaceli y alcalde mayor de Zaragoza⁵. Cosme García Talón había sido alcalde mayor de la ciudad de Murcia (1704-1707). Rodrigo Caballero había sido corregidor de señorío en Chiclana y alcalde mayor en Cádiz. Parece que había estado en Valencia a fines del siglo XVII, seguramente al servicio del virrey Pérez de Guzmán.

La promoción de gente que procedía de la llamada carrera “de varas” cesó casi completamente después de la caída de Macanaz en 1715. De los magistrados foráneos nombrados con posterioridad a esta fecha sólo pertenecían a dicha categoría Blas Jover Alcázar, alcalde mayor de la ciudad de Valencia, ascendido a la sala criminal de la Audiencia en 1733, y el regente Cayo Prieto Laso de la Vega (1719-1729), que

había sido alcalde mayor de Gibraltar en 1704 y luego teniente de asistente de la ciudad de Sevilla⁶.

El otro camino de acceso a la magistratura era el ejercicio de la abogacía. Antonio Cala de Vargas había sido abogado durante 20 años en Granada y en Madrid. José Martínez Talón era “un abogado muy docto en la ciudad de Murcia”, “uno de los grandes abogados de España”, según Macanaz. Su paisano Cosme García Talón había sido abogado del Concejo de Murcia de 1709 a 1714. Los abogados se encuentran presentes en los nombramientos efectuados en los años treinta. José Moreno Alvarado era secretario del colegio de abogados de Madrid, al que pertenecía desde hacía diez años. El regente Manuel de Toledo había sido decano del mismo colegio⁷. José Moreno Hurtado había sido pasante en la corte y abogado en Granada. Sebastián del Castillo lo fue en la Audiencia de Aragón durante once años, desde 1722. Tenía escritos cinco tomos de alegaciones y consultas. El marqués del Risco, consejero de Castilla de linaje aragonés, le calificaba como “uno de los más sobresalientes abogados de Aragón”. Entre sus clientes se contaba el Ayuntamiento de Zaragoza, la Casa de Ganaderos, la Orden de San Juan y sobre todo el infante don Luis de Borbón, los derechos de cuyas encomiendas defendió en el Consejo de Ordenes “con lucimiento y satisfacción”. Miguel Eugenio Muñoz y Lucientes ejerció como abogado en Zaragoza y Madrid durante diez años. Jacinto Miguel de Castro había sido abogado de la Chancillería de Valladolid durante 17 años⁸.

Algunos de los nuevos magistrados habían sido catedráticos de Universidad, aunque no eran colegiales mayores. Sebastián del Castillo lo había sido en Zaragoza durante 19 años: empezó sus sustituciones en 1722, al año de graduarse, y terminó siendo catedrático perpetuo de Vísperas de Cánones en 1733. A la misma universidad había pertenecido, antes de 1707, el borjano Tomás Martínez Galindo⁹. En Salamanca fueron catedráticos Francisco Velázquez Zapata de 1701 a 1707 y Lorenzo Delgado Sanromán (1727-1735), ambos naturales de la misma ciudad. Otro salmantino, Lorenzo Santayana Bustillo, fue nombrado en 1727 catedrático de Prima de leyes la universidad catalana de Cervera. Francisco Miravete Velasco alegaba 40 años de estudio, 30 de opositor y 14 de catedrático en la universidad de Toledo; además en 1690 se había incorporado al colegio de San Clemente de Bolonia. En Alcalá de Henares, Francisco de León Araujo, becario del colegio menor llamado de los Verdes, fue catedrático de Instituta de 1704 a 1719. Pedro de Valdés León opositó a cátedras en la universidad de Valladolid, pero sin alcanzar ninguna¹⁰.

En sentido estricto los colegios mayores sólo existían en las tres universidades castellanas de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Pero el fenómeno de los colegios universitarios era más amplio. Dos de nuestros magistrados, de origen aragonés, habían sido colegiales y catedráticos en la universidad de Huesca. José Vicente Ferrer había pertenecido durante 19 años al colegio de Santiago, y Pedro Ric Ejea al de San Vicente durante 17. Habían realizado una larga carrera de “grados, colegio y cátedra”¹¹.

En cuanto a estudios realizados, la mayor parte los habían cursado en alguna de las grandes universidades castellanas, a veces en dos de ellas, o una menor y otra mayor.

En Salamanca, además de los catedráticos citados estudiaron Miranda Oquendo, que era de Ciudad Rodrigo, y los andaluces Cala de Vargas, Moreno Hurtado y Trevani. Los dos últimos habían sido previamente colegiales en Granada, respectivamente en los colegios de Santa Catalina, y de San Bartolomé y Santiago. En Alcalá de Henares Moreno Alvarado¹² fue colegial de Santa Catalina (1715), y en la misma universidad estudiaron los aragoneses López Mesía y Miguel Eugenio Muñoz. Sólo dos magistrados habían estudiado en Valladolid (Castro y Valdés). Otros dos lo habían hecho en Sevilla, donde Juan Luis de Novela fue colegial (1733) y catedrático de Código hasta 1752. Juan de Losada y Temes, había sido colegial “muy antiguo” de Fonseca en Santiago de Compostela¹³.

Algunos magistrados manteístas habían ejercido previamente pequeños cargos de la administración local o central. José Alcedo Campuzano había sido juez de diezmos en Alcalá la Real. Miravete Velasco había servido en la administración española en Italia, concretamente en Finale desde 1696. Sebastián Sancho Abarca había sido auditor de galeras. En Aragón, Miguel Eugenio Muñoz sirvió como fiscal de residencia en pueblos. Sebastián del Castillo fue en aquel reino fiscal del tribunal de la Santa Cruzada y fiscal interino de la Audiencia. Juan de Losada había sido sustituto de relator en la Audiencia de Galicia, y Valdés León fiscal de la curia eclesiástica de León¹⁴.

Otros ocupaban cargos secundarios en la administración central. José Benito de Salazar había sido durante 20 años agente fiscal del Consejo de Órdenes. Luis de Miranda Oquendo había sido de 1709 a 1712 relator de la Audiencia de Zaragoza, y desde la última fecha hasta 1729 ejerció las mismas funciones en el Consejo de Castilla. Pedro de la Torre fue agente fiscal del propio Consejo para los asuntos de baldíos y arbitrios en 1740 y relator de la Junta de comercio y moneda¹⁵.

Atendiendo al lugar de nacimiento la clasificación es la siguiente¹⁶.

Castilla la Vieja	8	Cantabria	3
Murcia	7	Castilla la Nueva	3
Aragón	6	Asturias	1
Andalucía	5	Galicia	1
Navarra	1		

Dentro de cada región podemos establecer distintas áreas de procedencia. En primer lugar los que habían nacido en la capital de la misma, o en una ciudad. Encabeza la lista Murcia con cinco casos, seguida por Salamanca con tres, Valladolid con dos, y con sólo uno, Cartagena y Ciudad Rodrigo.

Era más frecuente la procedencia de villas de tamaño medio, como eran Valverde del Camino (Caballero), Cervera de Pisuerga (Cosío), Tembleque (Miravete), Hellín (García Galeano), Borja (Martínez Galindo), Calatayud (Muñoz), Lucena (Moreno Hurtado), Écija (Torre), Lebrija (Cala), Fonz (Ric),

Medinasidonia (Novela). Había magistrados que habían nacido en entidades menores de población, como Mogro, cerca de Santander (Alcedo Campuzano), Salinas de Oro, en Navarra (Ulzurrun), Tamajón y Mondéjar en la Alcarria (Moreno Alvarado y Prieto Laso, respectivamente), San Pedro Abarce, en la diócesis de Zamora (Jacinto Miguel de Castro). De dos magistrados sólo poseemos indicaciones generales. Benito de Salazar era originario de las Montañas de Burgos y Pedro de Valdés era asturiano.

Los informes reservados sobre los magistrados hacen constar algunas veces la edad de los mismos. En el momento de su nombramiento, superaban los cincuenta años tres jueces (dos de ellos antiguos corregidores), ocho se situaban en los cuarenta, y seis en los treinta. A partir de 1730 parece observarse una disminución en la edad de los magistrados.

Caballeros de Órdenes Militares

No todos estos manteístas procedían de sectores sociales menos favorecidos que los colegiales mayores. Ocho de ellos fueron caballeros de Órdenes Militares. Dos ya eran caballeros antes de su llegada a la Audiencia (Díez de Ulzurrun, 1697, y Gaspar de Zevallos, 1699). Cuatro obtuvieron el hábito durante su pertenencia al tribunal: Rodrigo Caballero en 1709, Alcedo Campuzano en 1716, Prieto Laso de la Vega en 1728, y José Moreno Alvarado en 1748. Otros tres lo hicieron en alguna etapa posterior de su carrera: López Mesía en 1739, Blas Jover en 1742 y Pedro Ric en 1753. En algunos casos el hábito no fue concedido al magistrado, sino a su hijo. En 1757 fueron aprobadas las pruebas de caballero de Calatrava de Manuel Alejo del Castillo, hijo de Sebastián del Castillo, el cual fue posteriormente alcalde del crimen de la misma Audiencia. En 1783 ingresaron en la orden de Montesa los dos hijos del magistrado Moreno Hurtado y de la valenciana Rita Roca y Escrivà. Fueron caballeros de Santiago el hijo de Alcedo Campuzano, que había nacido en Valencia y el nieto del regente Valcárcel Dato¹⁷.

Los expedientes de Órdenes Militares nos ofrecen información abundante sobre la procedencia social y familiar de los magistrados. Así, no sólo eran hidalgos los antepasados de Rodrigo Caballero, sino que su hijo y dos yernos también fueron caballeros de hábito, lo mismo que dos sobrinos de Alcedo Campuzano. Blas Jover descendía de oligarquías urbanas del sur del País Valenciano. Su bisabuelo había sido jurado en Ibi. Su abuelo había sido insaculado en la bolsa de caballeros de Alicante, y posteriormente se había establecido en Murcia, donde había ejercido las funciones de alcalde de Hermandad. El padre aparece citado como caballero generoso. Don Blas se casó con Francisca Valdenoches, procedente de una familia hidalga de Guadalajara, cuyo padre era funcionario de Hacienda en Valencia. El hijo de este matrimonio, también magistrado y caballero de Santiago, se casó en 1746 con la hija del marqués de la Olmeda, Procurador general de la propia orden¹⁸.

Tres de los caballeros de hábito eran infanzones aragoneses. Juan Luis López Mesía era hijo del jurista Juan Luis López, miembro del Consejo de Aragón y primer

marqués del Risco, el cual había casado en el Perú con la hija de otro magistrado con título: el marqués de Sierrabella. El segundo marqués, que había nacido en Huancavélica en 1689, se casó a su vez con la hija de otro titulado, en este caso militar: el marqués de Villasegura¹⁹. Los Ric eran “infanzones notorios”, bailes y jurados en la población ribagorzana de Fonze, en la que habían ejercido “oficios y empleos de hidalgo”. Los Ejea eran infanzones de Barbastro. El hermano de Pedro Ric, Pascual, fue caballero de Calatrava, y en 1765 obtuvo el título de barón de Valdeolivos²⁰. Sebastián del Castillo se presentaba como caballero noble del reino de Aragón. Su condición de regidor de Zaragoza suponía nobleza. Sus ascendentes maternos, los Jordán, eran también hijosdalgo, con capilla y escudo²¹.

También los magistrados que no fueran caballeros de Órdenes Militares podían acreditar un entorno noble. Los Velázquez Zapata eran regidores de la ciudad de Salamanca²². El padre de Miguel Eugenio Muñoz era ciudadano de Calatayud, y había sido insaculado para el gobierno de Zaragoza. En otros casos se alardeaba de “familia distinguida” o de “distinguido nacimiento”. Dos de estos manteístas, que llegaron a ser consejeros de Castilla, obtuvieron para sus hijos becas en los Colegios Mayores: Cala de Vargas en el de Cuenca de Salamanca, y Moreno Hurtado en el de San Ildefonso de Alcalá²³. Algunos enlazaron con la nobleza valenciana. Gaspar de Zevallos casó con la hermana del conde de Albalat, colega suyo de tribunal. Moreno Hurtado casó a los 36 años con Rita Roca, una joven noble de 18. La hija de Moreno Alvarado se casó con otro noble valenciano²⁴.

El acceso al cargo

En la primera etapa los nombramientos solían premiar servicios realizados durante la guerra de Sucesión. Rodrigo Caballero recibió al ser destinado a la Audiencia valenciana el ascenso posterior a alcalde de casa y corte, como estímulo para dirigirse a un país considerado peligroso²⁵. Cala de Vargas se había distinguido en el real servicio “en su patria”, en especial en el crítico año 1706. Miravete se refugió en 1706 en el colegio español de Bolonia, y ya en 1709 solicitó una vacante en la Audiencia valenciana. Martínez Galindo vio sus bienes confiscados en Tarazona y se retiró a Madrid, hasta que en 1707 fue nombrado fiscal de Sevilla. La familia de Vicente Ferrer alojó a más de 200 caballos y sufrió pérdidas económicas importantes. Alcedo Campuzano “benefició” en 1709 una plaza supernumeraria de alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, por influencia del financiero Bartolomé Flon, pariente de su mujer²⁶.

Sancho Abarca había sido decano en la Audiencia de Cerdeña durante la última presencia española en aquella isla y se benefició de una política de reasentamiento de los miembros de aquel tribunal, incluyendo la exención de pago de la media annata. Fue promovido a oidor de Valencia por delante de los fiscales Risco y Araujo, porque estos no habían cumplido el trienio acostumbrado para su ascenso²⁷.

En las etapas iniciales hubo una notable presencia de magistrados originarios del reino de Murcia: en 1710 González Escobedo, y en 1715 García Galeano, García

Talón y Martínez Talón. Este último era protegido directo de Macanaz, quien quería promocionarlo, y al mismo tiempo alejarle de la influencia del obispo Belluga. Talón protegió como “comensal” al también murciano Blas Jover, para el que consiguió rápidamente un nombramiento de relator, con la protección del presidente del tribunal Valcárcel Dato, “su amigo y murciano”²⁸. Macanaz favoreció también el ingreso en la magistratura de Manuel de Toledo, que 15 años más tarde fue regente del tribunal. Le consideraba “gran letrado y muy del rey... muy diestro en las materias de hacienda”. Los juegos de influencias continuaron en los años siguientes. León de Araujo era “hijo de ministro que murió alcalde de corte”. Sin embargo (y tras haber rechazado un 1699 una plaza en Guatemala) “se ha dejado cubrir de canas sin dar un memorial”. Fue recomendado a Alberoni por el consejero de Castilla Francisco de León y Luna, que había sido condiscípulo suyo en el colegio de los Verdes de Alcalá. En 1723 fue ascendido a oidor por delante del valenciano José Borrull, atendiendo a tener “cátedra más alta, más canas y le excede cuatro años como fiscal”²⁹. El marqués del Risco ascendió a oidor en 1727, cuando era el fiscal más antiguo de todos los tribunales. Le recomendaba el capitán general Campoflorido, el cual protegió también a Blas Jover, para el que había pedido en 1723 una plaza supernumeraria de alcalde del crimen³⁰. Miranda Oquendo tenía en su favor el haber asistido a “varias juntas de negocios extraordinarios”, en las que se había portado “con secreto y caballerosamente”³¹.

Las relaciones familiares tenían su importancia en la designación de un magistrado, incluso de forma explícita. El marqués del Risco alegaba los “servicios de sus mayores”. Moreno Alvarado, “que no es de lo más sobresaliente, y menos para fiscal”, fue favorecido por sus relaciones familiares en la alta administración y en la Casa Real. Los hermanos Ric Ejea eran sobrinos del marqués de la Compuesta, ministro de Gracia y Justicia, según recordó el cardenal Molina, gobernador del Consejo de Castilla. Pedro Ric fue nombrado fiscal de la Audiencia valenciana fuera de consulta³².

Miguel Eugenio Muñoz obtuvo el cargo por una obra escrita en honor de María Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos de Nápoles. Se le prometió la primera plaza que quedara vacante en una Audiencia de la Corona de Aragón, y se le concedió fuera de consulta el título de oidor, pasando por delante de los tres alcaldes del crimen, que podían aspirar al ascenso³³.

Sebastián del Castillo debió la plaza a la protección del cardenal infante don Luis de Borbón, que le había cometido “diferentes encargos”. El cardenal Molina, gobernador del Consejo de Castilla, había considerado excesiva la concesión de honores y sueldo de alcalde de casa y corte, pero el rey mandó en 1742 que se le consultara en la primera plaza vacante de la Corona de Aragón. Después de su nombramiento obtuvo cuatro meses de plazo en la toma de posesión “por estar concluyendo una obra sobre los derechos y preeminencias del Infante”. La protección de don Luis continuó. Como decía el arzobispo Mayoral en 1755, Castillo “tiene indulto para ir a la Audiencia cuando quiere, por el encargo o ocupación que tiene del señor infante por sus encomiendas”. Los beneficios que obtenía le mantenían satisfecho en Valencia³⁴.

Pedro de la Torre llegó a la corte “con traje militar” con motivo de la defensa de los baldíos de su Ecija natal. Fue protegido por la familia del Cardenal Molina, y por el sucesor interino de éste, el marqués de Lara, que le propuso para fiscal de la Sala de Alcaldes³⁵. Ello no fue óbice para que el protegido criticara al marqués en carta a Mayans: “el marqués de Lara, a título de ingenio y timorato no yerra golpe en lo que le conviene”³⁵.

Una Labor intelectual

Algunos de los magistrados no colegiales dejaron alguna obra escrita. Significativamente cuatro de ellos eran aragoneses. Tomás Martínez Galindo había redactado “una exposición metódica y general de todo el Derecho civil de España”, un “librillo que une lo especulativo con lo práctico”, el *Phoenix Jurisprudentiae Hispaniae*, publicado en Sevilla en 1715, tras diez años de elaboración. También fue autor de escritos fiscales y papeles jurisperitos³⁶.

López Mesía había escrito algunos papeles sobre la jurisdicción real. Dedicó al príncipe de Campoflorido una obra de su padre, la “*Aragoniae gentis et regni Vindictia*” (Madrid 1732). Parece además que poseía algunos textos manuscritos del jurista valenciano del siglo XVII y vicescanciller del Consejo de Aragón, Cristóbal Crespi de Valldaura³⁷.

Muñoz y Lucientes era autor de una obra varia, escrita con ante rioridad a su nombramiento y publicada toda ella en Madrid. “El abogado del aire y del fuego” (1731), era una respuesta a Torres Villarroel. “El clarín de la Italia” (1734), describe la situación internacional con motivo de la guerra de Sucesión de Polonia”. El “Discurso sobre la antigüedad y prerrogativas de los ricos hombres de Castilla y Aragón” (1736) defiende la condición de Grandes de los condes de Luna, protectores de Muñoz. Este fue uno de los primeros miembros de la Real Academia de la Historia. En los años siguientes simultaneó su labor erudita de académico y sus servicios a la política dinástica de Isabel de Farnesio, con las “Memorias ilustres de la Casa de Saxonia”. En 1741 redactó un discurso manuscrito sobre los derechos que Felipe V podía alegar a la muerte del emperador Carlos VI.

A principios de los años cincuenta colaboró en la campaña de archivos coordinada por el jesuita Burriel, lo que supuso dejar de asistir a la Audiencia. Burriel lo consideraba “mui hábil y versado en todas materias”. En 1751 en función de su cargo de juez subdelegado recopiló las leyes del Protomedicato. Por su conocimiento de los archivos el intendente propuso en 1765 que redactase una Historia del Real Patrimonio, la obra que años más adelante realizó Vicente Branchart³⁸.

Lorenzo Santayana había sido condiscípulo de Mayans en Salamanca. En Cervera se hizo amigo de Finestres, quien comunicó su buena opinión a Mayans cuando el salmantino fue nombrado fiscal de la Audiencia de Valencia.

“Es D. Lorenzo muy amigo mío, y muy aficionado a V. M. y desea sumamen-

te tratarle, aviendo siempre conservado sus memorias del tiempo en que estudiaron juntos en Salamanca”.

En Cervera, Santayana y Finestres comentaban la obra de Mayans. Don Lorenzo publicó en 1733 una obra jurídica latina, “que es el tratado que dictó en la universidad el años pasado”. Esperaba utilizar la edición, con su dedicatoria, para conseguir un nombramiento de magistrado. Cuando ya no pertenecía a la Audiencia valentina, Santayana publicó en Zaragoza el “Gobierno político de los pueblos de España” (1742), y “Los magistrados y tribunales de España (1745/1751). En 1760 entregó en mano a Carlos III un memorial contra los colegiales mayores, que fue atribuido a Finestres. Su última obra conocida, de temática jurídica, es de 1766³⁹.

Novela fue correspondiente de la Real Academia de la Historia (1748). Pedro de la Torre escribió una Historia genealógica de la casa de Lara, publicada en Valencia en 1751. En realidad era alegato para defender los derechos del marqués (que había nacido en Perú) a la posesión del marquesado de Amusco. Lara proporcionó a Torre los materiales, que éste ordenó “con singular pericia y destreza”⁴⁰.

El fiscal Vega Canseco (de posible filiación ensenadista) mantuvo una interesante correspondencia con Mayans, el cual le consideraba “habilísimo”, de “grande ingenio y escogida erudición”. En 1760 don Gregorio le encarecía la necesidad de una reforma de los estudios de derecho, una reforma que debía ser sostenida por un monarca tan autoritario como Luis XIV y Pedro I de Rusia. En función del cargo de fiscal Mayans exhortaba a Vega a defender la jurisdicción real, a la que consideraba “enflaquecida” desde hacía medio siglo y “fuertemente combatida” en aquel momento. También le recomendaba la necesidad de conocer las leyes forales, y los tratadistas valencianos de los siglos XVI y XVII, para lo cual debía conocer lengua del país. Cuando el fiscal murió en 1763, don Gregorio expresó su sentimiento por la pérdida de un “letrado habilísimo y de buen juicio”⁴¹.

Subdelegaciones y comisiones

No conocemos la actitud colectiva de los jueces de la Audiencia. En cambio estamos mejor informados del ejercicio de comisiones extraordinarias, que se les encomendaban como visitadores, jueces conservadores, o subdelegados de jurisdicciones especiales.

Procederemos a clasificar estas jurisdicciones. Algunas tenían una vinculación específica con peculiaridades propias del reino de Valencia; por ejemplo cuestiones derivadas de la guerra de Sucesión. La jurisdicción de los bienes confiscados a los austracistas fue encomendada en 1717 a Ulzurrun y Martínez Galindo, y en 1718 a Alcedo. Los estados del conde de Elda fueron confiados en 1719 a Ulzurrun y en 1723 al marqués del Risco⁴².

La visita de los derechos de amortización fue encomendada en 1707 a Isidro de San Pedro y en 1719 a Ulzurrun. El ejercicio de la misma fue especialmente valorado en los años cuarenta como un mérito especial en el *curriculum* de un magistrado.

A Moreno Hurtado le valió en 1742 el ascenso a alcalde de casa y corte. Su sucesor, Pedro Ric, obtuvo los honores de fiscal del Consejo de Hacienda, y el apoyo del intendente, del que también era asesor, para sus ascensos. En 1749 fue Pedro Valdés el nombrado juez real de la visita de amortización⁴³.

La Acequia real del Júcar tenía una especial importancia en la agricultura valenciana. Su inspección o visita era cometida a jueces de la Audiencia, entre ellos Isidro de San Pedro, Alcedo Campuzano (1712), y posteriormente Moreno Alvarado⁴⁴.

En el régimen de Nueva Planta el capitán general contaba con la asesoría de alguno de los magistrados de la Audiencia, el cual podía ejercer las funciones de auditor de guerra. Lo fue Alcedo Campuzano, primero sin sueldo y a partir de 1721 con 400 escudos de plata. El capitán general duque de Caylus contó con la asesoría de Pedro de Valdés, al que en 1741 nombró auditor sin sueldo. Tras el ascenso de Valdés (que llegó a ser miembro del Consejo de Guerra) fue auditor Pedro de la Torre, al que se acusó de recibir dádivas para que el capitán general autorizara el cultivo del arroz. Caylus protegía a Torre, acusado de corrupción y concubinato por el arzobispo Mayoral. También el siguiente asesor, Sebastián del Castillo, fue criticado como interesado en el ejercicio de su cargo⁴⁵.

Los magistrados de la Audiencia ejercían la asesoría de la Orden de Montesa, como Alcedo Campuzano y Moreno Alvarado. Este último acumulaba en 1741 las funciones de protector del Colegio del Corpus Christi, del colegio de corredores de cambios y del Hospital real. En la fecha indicada Lorenzo Sanromán era juez protector de los colegios de plateros y terciopeleros. Pedro de Valdés León fue uno de los encargados de confiscar los manuscritos de Mayans en 1743. En 1747 se le encargó el corregimiento de Játiva con la misión de elaborar nuevas ordenanzas para la población⁴⁶.

Los magistrados ejercían también funciones de jueces conservadores y subdelegados. Rodrigo Caballero en 1707, León Araujo en 1722, y Pedro Valdés en 1739, fueron jueces conservadores de la nación francesa⁴⁷. La jurisdicción de la renta del tabaco fue conferida al mismo Caballero (1708), a Alcedo Campuzano (1718), Blas Jover (1732) y Moreno Alvarado⁴⁸. Lo mismo sucedía con otras rentas. La del azogue fue confiada a León Araujo (1727), Jover (1730) y Delgado Sanromán (1738); la de las salinas a Miranda Oquendo (1736); la de las lanas a Risco y a Vicente Ferrer (1736), que también fue asesor de rentas generales; la del papel sellado a Sebastián del Castillo⁴⁹.

La subdelegación de correos y estafetas fue ejercida por Cosío Bustamante (1718), León Araujo (1730), Jover y Delgado Sanromán. Los superintendentes generales de “conducciones, fugas y solturas de galeotes y presidiarios” nombraron subdelegados a Cosío (1716), Risco (1723), Miranda (1736), Valdés León (1742) y Pedro de la Torre (1751). Risco y Miranda fueron sucesivamente jueces conservadores del asiento y provisión de pólvora. En 1738 Delgado Sanromán era juez conservador de la renta del azogue, y de los asientos de plomo, municiones, pólvora y salitre⁵⁰.

La nueva subdelegación de la Junta de comercio y moneda fue ejercida por Risco (1733-1736 y Sanromán (1736-1742)⁵¹. Los aragoneses Ferrer y Ric desempeñaron la importante asesoría de la intendencia. Otros dos aragoneses se sucedieron en la subdelegación del Protomedicato: Miguel Eugenio Muñoz en 1747 y Sebastián del Castillo diez años más tarde⁵². El primero publicó en 1751, en la imprenta valenciana de Bordázar una “Recopilación de leyes...” de la institución, precisamente con aprobación de Castillo.

De los ejemplos anteriores se habrá observado una tendencia al ejercicio de varias comisiones especiales, lo que producía rivalidades entre los magistrados. Alcedo tuvo “disgustos con sus compañeros por acumular todas las comisiones útiles del reino”. El control de las jurisdicciones extraordinarias fue causa de la hostilidad entre el marqués del Risco y Blas Jover. Sebastián del Castillo era “medio alcalde”, pues por las muchas comisiones que tenía atribuidas faltaba frecuentemente a la Audiencia.

Influencias y clientelas

La vida del tribunal estaba condicionada por el juego de influencias y de clientelas. Durante la guerra de Sucesión se distinguían los protegidos y los enemigos de Macanaz. De estos últimos fueron Rodrigo Caballero y Velázquez Zapata.

Posteriormente continuaron las rivalidades entre los magistrados. Alcedo era considerado “inquieto y bullicioso”. Quejas contra su actuación habían llegado al Consejo de Castilla, por lo que se pensaba en trasladarle a otro tribunal. En 1727, el intendente Clemente de Aguilar denunciaba los “desórdenes robos y tiranías” de Alcedo y del entonces alcalde mayor Blas Jover, ambos protegidos del capitán general, príncipe de Campoflorido. Jover logró controlar en 1730 las jurisdicciones de azogues y estafetas, y dos años más tarde la del tabaco, pero en 1735 se vio afectado por la comisión de justicia dada al marqués del Risco para investigar la actuación del corregidor de Valencia y sus alcaldes mayores. Risco gobernó la ciudad durante un año⁵⁵.

El capitán general duque de Caylus, que asumió en 1737 la presidencia del tribunal, criticó duramente al regente Manuel de Toledo, al que consideraba intolerable, incapaz de gobernar las salas por su cabeza perdida, cada día alborotando con sus desentonadas voces y malos tratamientos a los ministros.

En 1739 logró la remoción de éste y del fiscal Santayana⁵⁶.

Algunos magistrados foráneos llegaron a arraigarse en el país, por medio del matrimonio y de la adquisición de propiedades rurales. Moreno Alvarado descuidaba la asistencia al tribunal por la de sus masías, además de mostrar parcialidad hacia sus protegidos. También el aragonés Muñoz se había convertido en hacendado, “en lo que tiene puesto su principal cuidado”⁵⁷.

Los informes reservados sobre los miembros del tribunal valoraban distintos elementos en la figura del magistrado. Por ejemplo, el carácter: el de Miravete “algo

díscolo y levantado”, vivo el de los aragoneses Muñoz y Castillo, “afable y cortésano” el de Miranda Oquendo. Blas Jover descollaba por su “natural resolución y desembarazo”.

Otros elementos considerados eran la integridad, la salud y la debida asistencia al tribunal. También se atendía a la conducta, al porte regular, decente, o no muy arreglado el del gallego Losada, que salía con los dependientes del juzgado de provincia. El conocimiento jurídico o “literatura”, era conceptuada como corta, mediana, moderada, grande, suficiente, bastante, decente. Todos estos juicios tenían un componente subjetivo y sería prolijo enumerar todos los detalles⁵⁸.

El modelo de ascensos

El modelo de ascensos ofrecido por los magistrados manteístas contrasta fuertemente con el representado por los colegiales mayores, de los cuales, aparte de los regentes, ascendieron 18 sobre 23. En cambio, trece manteístas murieron en la propia Audiencia sin ascender, tras años de servicio. Nueve habían alcanzado el grado de oidor, tres eran alcaldes del crimen y el último fiscal.

1713.	Isidro de San Pedro	6 años
1726.	González Escobedo	16 años
1723.	Cosío Bustamante	12 años
1717.	Zevallos.	3 años
1720.	Ulzurrun	7 años
1728.	Miravete	16 años
1727.	García Galeano	2 años
1730.	Sancho Abarca	10 años
1730.	Leon Araujo	años
1736.	Martínez Galindo	20 años
1742.	Miranda Oquendo	12 años
1763.	Sebastian del Castillo	20 años
1763.	Vega Canseco	años

San Pedro murió en Torrente, donde había pasado a convalecer. La salud de los magistrados era especialmente mala a principios de los años 20, cuando había en el tribunal varios antiguos corregidores, con mucho tiempo de servicio. González Escobedo quería el traslado a Granada, por achaques en la vista que le causaba el clima de Valencia. Años después estaba completamente ciego. Cosío Bustamante estaba casi apoplético por sus muchos años y accidentes. Miravete amenazado de perlesía. García Galeano, baldado y sin movimiento en las piernas, se hacía llevar a la Audiencia en coche⁵⁹. Las ausencias por enfermedad siguieron

presentes en años posteriores. Delgado Sanromán en sus últimos años no asistía al tribunal por enfermedad. En 1755 Novela pretendía el retorno a Andalucía “por sentar mal esto a su mujer”.

Cinco magistrados manteístas fueron jubilados: Salazar (que en realidad renunció a su plaza en 1733 y murió poco después)⁶⁰, Sanromán, Ferrer, Moreno Alvarado y Muñoz. Sanromán obtuvo la jubilación en 1751 por su avanzada edad y estado de salud sin esperanza de restablecimiento. Murió en 1755 en Burjasot y se le enterró con hábito de capuchino. Los tres últimos fueron jubilados ya en el reinado de Carlos III. Ferrer fue jubilado forzoso en 1763 (tenía más de 70 años), aunque consiguió que se le mantuviera el sueldo y los honores. Moreno Alvarado y Muñoz fueron jubilados en 1772, cuando se encontraban en condiciones físicas deplorables⁶¹.

Algunos oidores deseaban obtener un ascenso dentro del mismo tribunal. Alcedo, que era decano desde 1719, aspiraba a regente, y en 1727 el capitán general apoyaba esta solicitud, pero se consideró que no era bueno que el regente hubiera sido compañero de tribunal. También Moreno Alvarado aspiró a regente, en 1746, y llegó a ser decano en 1765. Valdés León era en 1741 el alcalde del crimen más antiguo, pero no logró ascender a oidor a pesar de la protección del capitán general Caylus. En tres ocasiones fue propuesto en primer lugar de la terna, pero siempre se vio postergado: la primera vez por el nombramiento extraordinario de Miguel Eugenio Muñoz, y las otras dos por colegas del mismo tribunal que eran colegiales mayores. En 1750 recibió los honores de alcalde de casa y corte, y al año siguiente la plaza efectiva⁶².

Por muy deseosos que estuvieran de ascender, los oidores rechazaban el nombramiento de regente en una Audiencia lejana. Miravete, Araújo y el marqués del Risco renunciaron el nombramiento de regente de la Audiencia de Canarias, una plaza que el duque de Caylus pidió en 1746 para su protegido Pedro de Valdés⁶³. Cinco de nuestros magistrados pasaron a otras Audiencias. Los fiscales Martínez Talón y Santayana fueron nombrados fiscales de la Audiencia de Aragón. Otro fiscal, Pedro de la Torre, fue trasladado a la Audiencia de Asturias. Novela fue nombrado oidor de la Audiencia de Sevilla, y Losada de la Chancillería de Valladolid. Rodrigo Caballero había seguido desde 1711 la carrera de intendente, que le llevó a su último destino en el Consejo de Guerra.

Nueve de nuestros manteístas llegaron a ser miembros de un consejo, a través de la vía de la regencia de un tribunal (tres casos) o de la pertenencia a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (seis casos). Alcedo Campuzano fue miembro del Consejo de Órdenes, y Pedro de Valdés del de Guerra. Los siete restantes culminaron su carrera como consejeros de Castilla, de ordinario después de haber servido en otros consejos, como los de Órdenes, Hacienda e Indias. Fueron los siguientes: Velázquez Zapata (1723), Cala de Vargas (1729), Risco (1741), Jover (1742), Pedro Ric (1760), Moreno Hurtado (1763), Jacinto Miguel de Castro (1772).

De los tres regentes manteístas, uno fue consejero de Castilla (Valcárcel Dato), otro de Órdenes (Prieto Laso de la Vega) y el tercero de Hacienda (Manuel de Toledo).

En la famosa “Noticia de los ministros de S.M. de dentro y fuera de esta corte” de 1765 aparecen como tomistas Moreno Alvarado, y “mui seguro” Pedro Ric Egea. En cambio eran considerados pro-jesuitas los aragoneses Castillo y Muñoz (este último había estudiado con la Compañía en Calatayud), así como Castro y Moreno Hurtado, que a la sazón eran consejeros de Indias.

NOTAS

1. P. MOLAS RIBALTA, “Magistrados valencianos en el siglo XVIII”, en *Mayans y la Ilustración*, Valencia 1982, I, pp. 81-122. “Colegiales mayores en la Audiencia de Valencia (siglos XVII-XVIII)”, en *Pedralbes, Revista de Historia Moderna*, Barcelona, num. 1, 1981, p. 51. “Los magistrados de Carlos III en Valencia”, en *Estudis*, Valencia, num. 14, 1988, pp. 7-34, y en *Carlos III y la Ilustración*, Actas del Congreso Internacional, Ministerio de Cultura, Madrid, 1989, I, 405-421. “El Real Acuerdo de Valencia en el declive del Antiguo Régimen”, en *La Ilustración española*, Alicante 1986, pp. 385-402. “La Audiencia de Valencia de 1808 a 1814”, en *Estudis*, num. 10, 1983, pp. 183-214. “L’Audiència de València durant el regnat de Ferran VII”, en *Afers*, num. 2, 1985, pp. 309-340. “Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón”, en *Estudis*, num. 5, 1975, pp. 59-134, recogido en *Historia social de la administración española*, Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona 1980, pp. 117-164.
2. Sobre el proceso de substitución de los jueces “nacionales por foráneos”, MOLAS 1980. pp.126 y ss.
3. Archivo General de Simancas. Gracia y Justicia. Legs. 134-135, AHN. Consejos. 18.215, 18.216 y 18.217.
4. Sobre Díez de Ulzurrun, alcalde de la Corte Mayor de Navarra en 1699 y oidor del Consejo Real en 1707, ver la tesis doctoral de José M^o. SESE. *El Consejo real de Navarra en el siglo XVIII*. Tesis Universidad de Navarra 1990, I, 282-283. El papel de Sancho Abarca en Cerdeña es citado por Miguel Ángel ALONSO AGUILERA, *La conquista y el dominio español de Cerdeña, 1717-1720*. Valladolid 1977, p. 118.
5. Archivo Histórico Nacional. Consejos Suprimidos. Leg. 18.217. Informe del regente de la Audiencia sobre los alcaldes del Crimen. 18.216. Relación particular de los ministros de esta Audiencia (González Escobedo, García Galeano). 18.217. Memorial de D^a.Teresa Torán, viuda de don Gaspar de Zevallos; adjunta la relación de servicios de éste.
6. AGS. GJ. Leg. 135. s.f.
7. *Ibidem*. Legs. 133 (Cala, Toledo, Martínez Talón) y 138-139 y 814 (Moreno Alvarado).
8. *Ibidem*. Legs. 145, 148, 150.
9. Gerónimo BORAO, *Historia de la Universidad de Zaragoza*, reedición, Zaragoza 1987, p. 130.
10. ESPERABE de ARTEAGA, *Historia de la Universidad de Salamanca*, VIII, 626. Sobre el Colegio de Santa Catalina o de los Verdes, José de RUJULA, *Índice de los colegiales de Alcalá*, Madrid 1946, XX. *Epistolario Finestres*, Barcelona 1933, I, 187, 189, 237.

Finestres a Mayans. “D. Lorenzo Santa-Yana, contemporáneo de Vm. en Salamanca, y ahora cathedrático de Prima de esta Universidad”. Su hermano José fue catedrático de Cánones en Salamanca a partir de 1741. Antonio PEREZ MARTIN, *Proles Aegidiana*, III, Bolonia 1979, num. 1201. En el colegio se conserva un retrato de Miravete, con la inscripción “Audientiae Valentinae Praeses”. No fue regente del tribunal, aunque sí oidor decano del mismo. Filemón ARRIBAS, *Relaciones y justificaciones de méritos y servicios de catedráticos...profesores y opositores a cátedras*, Valladolid 1962, nums. 850 (Castro) y 1868 (Valdés).

11. AGS. GJ. 137, 139, 145 (Ferrer y Ric).
12. *Ibidem*, Legs. 133 (Cala), 141, 142, 145 y 147 (Moreno Alvarado, Moreno Hurtado).
13. *Ibidem*, Leg. 152 (Novela) y 155 (Losada).
14. Además de las referencias ya citadas para cada personaje, leg. 143 (Valdés) y 145 (Muñoz).
15. *Ibidem*, Legs. 135, 140 y 144.
16. Comparar con la procedencia de consejeros de Castilla, estudiada por Janine FAYARD, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621- 1756)*, Madrid 1982, pp. 221 y ss.
17. Vicente CADENAS VICENT, *Caballeros de la Orden de Santiago (siglo XVIII)*, II, 264 (Prieto Laso de la Vega), III, num. 369 , III, 190-192 (Jover), IV, 29 (Moreno Alvarado), V, 107 (Valcárcel Dato). Del mismo autor, *Caballeros de la Orden de Catatrava, siglo XVIII*, II, Madrid 1987, p.382 (Alcedo), 25 (Castillo), 209 (Pascual Ric Ejea). José Antonio Alcedo Campuzano, obtiene por compra en 1731 el título de marqués de Villaformada. Archivo Histórico Nacional, *Catálogo de documentos referentes a Títulos y Grandezas*, Madrid 1951-1954, I, 64-65 y III, 586-587.
18. El *curriculum* de Jover en Gregorio MAYANS i SISCAR, *Epistolario*, XI. *Mayans y Jover*, I, Valencia 1991. Estudio preliminar y notas de Pere MOLAS.
19. Sobre Risco, Janine FAYARD, pp. 228,267,298.
20. AHN. Ordenes Militares, expediente 380.
21. Sebastián del Castillo. AHN. Consejos suprimidos. Leg. 18.117, num. 12 AGS. GJ. Relación de los títulos y méritos del Doctor Don Sebastián del Castillo, Cavallero Noble del Reyno de Aragón, Regidor perpetuo de la Ciudad de Zaragoza y Abogado de Cámara de las Encomiendas del Serenísimo Real Infante Cardenal.
22. Sobre Velázquez Zapata. J. FAYARD, “Los ministros del Consejo Real de Castilla. (1621-1788)” *Hidalguía*, num. 168, 181, num. 2. Hoja de servicios en AHN. Consejos. Leg. 18.221. Fiscales de la Audiencia de Valencia. Era regidor, hijo de regidor, y casó a su hija con otro regidor.
23. PÉREZ BAYER, *Memorial por la libertad de la literatura española*, edición de Antonio MESTRE, Alicante 1992, p. 141 (Cala) y 192 (Moreno Hurtado). Sobre este último, Luis Miguel GUTIÉRREZ TORRECILLA, *Catálogo biográfico de colegiales y capellanes del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, 1708-1786*, Alcalá 1992, p. 73. Gerónimo Moreno Roca, nacido en Valencia. RUJULA, p. 560, le cita como Jerónimo Moreno Escrivá, por el segundo apellido de su madre.
24. AHM. OM. Montesa. expediente 322 (Moreno Roca). FAYARD, *Hidalguía*, num. 169, p. 988.
25. Diego ROMERO PÉREZ, “Avances de una biografía del intendente D. Rodrigo Caballero Illanes” en *Dels Furs a l'Estatut, Actes del I Congrés de l'Administració Valenciana*. València 1993, pp. 213-219.

- Eduardo ESCARTIN, "El intendente andaluz Rodrigo Caballero", *Actas I Congreso Historia Andalucía, Historia Moderna, Siglo XVIII*, I, 251-271. También en *Historia social de la administración española*, 252-257. Vicente FERRAN SALVADOR, "Notas genealógicas de D. Rodrigo Caballero", *Anales del Centro de Cultura Valenciano*, XIV, 1952, 306-313. CADENAS VICENT, *Caballeros Santiago*, III, 1977, p. 7.
- Su testamento en ARV. Protocolo 7.300, fol. 213.
26. AGS. GJ. Leg. 133 (Cala de Vargas), 140 (Alcedo). AHN. Consejos suprimidos, Leg. 9.902 (Vicente Ferrer).
 27. Los criterios del nombramiento de Sancho Abarca, por delante de los dos fiscales, en AGS. GJ. Leg. 135.
 28. Sobre Martínez Talón, *Ibidem*, leg. 133. BUV. Mss. 24, fol. 368. Según Macanaz, Talón "se mostró siempre muy reconocido". Su protección a Jover en AHN. Consejos. Leg 6814 num. 40. Sobre Manuel de Toledo, AGS. GJ. Leg. 133.
 29. Los criterios oficiales de preferencia de Araujo sobre Borrull, en AGS. GJ. Leg. 137, pero veanse también las razones expuestas en carta a Mayans. Antonio MESTRE, *Historia, fuentes y actitudes políticas*, Valencia 1970 p.436 n.239.
 30. La protección de Campoflorido sobre Risco y Jover en AGS. GJ. Leg. 138.
 31. Los méritos previos de Miranda Oquendo, AGS. GJ. Leg. 139, 143.
 32. La familia de Moreno Alvarado en GJ, Legs. 138-139 y 141-142. Sobre Risco, *ibidem*, 137. Sobre la familia Ric, MOLAS, *Estudis*, num. 5 1975, pp. 100-102. LATASA, *Biblioteca de Autores aragoneses*, Zaragoza 1885, III, pp. 44-45. AGS. GJ. 147 y 149. Sobre el nombramiento de fiscal de Valencia, MAYANS, *Epistolario*, VII, *Mayans y Martínez Pingarrón*. I, Valencia 1987, p. 137.
 33. MOLAS, *Estudis*, 1988, pp. 19-20, sobre Muñoz Lucientes, según LATASA, II, 327-329,
 34. AGS. GJ. leg. 150 y 590. Archivo del Reino de Valencia. Real Acuerdo. 1742, fol. 67.
 35. Sobre Pedro de la Torre, AGS. GJ. Leg. 149-150.
 36. La obra de Martínez Galindo es comentada por Mariano PESET, en "Derecho romano y Derecho real en las Universidades del siglo XVIII", *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1975, p. 318. "Un práctico que quiere redactar la Instituta del Derecho patrio a través de una elaboración de nuestros cuerpos legales". AGS. GJ. AHN, Consejos, 17.955.
 37. LATASA, II, 161 y ss. XIMENO, *Escritores del Reino de Valencia*. Valencia 1747, reedición facsímil 1980, II, 65.
 38. La obra de Muñoz y Lucientes reseñada por LATASA, *Biblioteca de Autores aragoneses*, Zaragoza 1885, II, 377-379. Francisco AGUILAR PIÑAL, *Bibliografía de autores del siglo XVIII*, tomo V, pp.882- 884. *Epistolario Mayans- Burriel*, Valencia 1972, pp. 487. 490, 638. Marqués de SIETEIGLESIAS, "Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, CLXXV (1978), p.33.
 39. Lorenzo SANTAYANA, *Gobierno político de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde y juez de ellos*. Estudio preliminar de Francisco TOMAS y VALIENTE, Madrid 1979. La obra manuscrita e impresa de Santayana es reseñada por AGUILAR PIÑAL, *Bibliografía*, tomo VII, pp. 533-534. *Epistolario Finestres*, I 237 y III, 1486. "Pobre inventor de fábulas es el que me atribuye el memorial dado al Rey contra los colegiales... Se daba por cierto que D. Lorenzo Santayana lo había presentado al Rey en Zaragoza". Este memorial en Biblioteca Nacional. Mss. 11.361. "Papel que escribió desde Zaragoza en que manifiesta la enfermedad que padece la monarquía de España".

40. Biblioteca Universitaria de Valencia, Mss. 65 /12. "Carta de D.Gregorio Mayans y Siscar al autor del la Historia genealógica de la casa de Lara...cuyo autor fue D.Pedro de la Torre, fiscal criminal en la Real Audiencia de Valencia, y se imprimió en dicha ciudad, año 1751".
41. Sobre Vega Canseco, MESTRE, op. cit. pp. 407-408. Gregorio MAYANS, *Epistolario*, VIII, *Mayans y Martínez Pingarrón*, 2 Valencia 1988, p. 29. *Epistolario*, V, *passim*. Mayans le exhortó a que estudiara algo la lengua del país, "como en otro tiempo hacían los grandes hombres", para poder estudiar los fueros del reino, los autores de los siglos XVI y XVII y las sentencias de la Audiencia. Véase el comentario de Mayans a la muerte de Vega. "Era letrado habilísimo y de buen juicio". Ibidem 142.
42. ARV. Rl. Ac. Libro 12, fol. 289. Libro 13, fols. 250-251. Libro 18. 439.
43. J. BRINES, "El proceso de amortización eclesiástica en el Pais Valenciano", *Estudis*, num. 3, 1974, p. 19. Según BRANCHART, III, 183. ARV. Real Ac. Libro 1, fol. 115. Libro 44, fol. 526-529. Título de juez de amortización a don Pedro de Valdés León.
44. *Ibidem*, Libro 6, fol. 19. Libro 7, fol. 37.
45. Sobre asesores y auditores de guerra, *Guía de Forasteros en Valencia para el año 1741*. Sobre Moreno Alvarado, AGS, GJ, Leg. 818. Las críticas a Pedro de la Torre en AGS, GJ. legs. 155 y 590.
46. Pedro de Valdés citado en STRDOTMANN, *Gregorii Maiansii Vita*, Valencia 1974, pp. 137-139.
Su papel en Játiva, en AHN. Consejos. Leg. 6810 num. 92. "Representación del Consejo de S.M. acerca de los méritos de don ...decano de la Sala del crimen de la Audiencia de Valencia, con motivo de la visita que ha hecho a la ciudad de San Felipe y las Ordenanzas que ha formado para su gobierno" ARV. Real Ac. Libro 42, fol. 225. AGS. GJ. 590. Informe del capitán general duque de Caylus.
47. Libro 1, fol. 115. Libro 17, fol. 239. Libro 34, fol.64.
48. Libro 2 fol. 18. Libro 12, fol. 240, Libro 13 fol. 209 y 213.
49. Libro 13 fol. 289. 1738, fol. 43?. Libro 31 fol. 653 (salinas).
50. Libro 13, fol. 303. Libro 22 fol. 37. Para galeotes Libro 11 fol. 63. Libro 18, fol. 442. Libro 37, fol. 475.
51. ARV. Real Acuerdo. Libro 31, 1736, fol. 503. Juez subdelegado de la Real Junta de Comercio. También libro 33, 1738, fols. 23 y 162.
MOLAS RIBALTA, "València i la Junta de Comerç" *Estudis*, num. 3, 1974, pp. 59-60.
52. *Ibidem*, Libro 42, fol. 447.
53. BUV. Mss. 24. fol. 232. Memorial en derechos por la real jurisdicción en la ciudad y reino de Valencia sobre los procedimientos del Provisor Oficial y Vicario General. *Ibidem*, fol. 256. El empleo con que S. M. se ha servido honrarme me pone en la precisa obligación de defender las regalías y jurisdicción secular. fol. 278. Memorial en hecho y derecho por la real jurisdicción y rentas de S.M. en el reino de Valencia en las controversias por la jurisdicción eclesiástica en el Obispado de Orihuela, sobre pretender los arrendadores de frutos decimales y primeros compradores de estos puedan embarcar oír el puerto de Alicante dichos frutos sin pagar derechos algunos". También escribió una defensa de la fundación de San Felipe. *Ibidem*, fol. 364.
54. AGS. GJ. legs- 130-140.
55. La comisión de Risco en MOLAS, "Sátira política a València el 1735", *Homenatge al Dr. Sebastià Garcia Martinez*, II, València 1988, pp. 312-326.

56. AGS. GJ. Legs. 143 y 146. Otros informes sobre Toledo confirman que “no logra la aceptación ni el concepto de superior en aquel tribunal por su genio vivo”, pero “sin que en lo sustancial haya faltado a su obligación”. Parece que sus conocimientos jurídicos eran amplios, “pero muy mal digeridos”, por falta de método.
57. Leg. 590. Informe del regente de la Audiencia, Marcos Jimeno Rodríguez.
58. AGS. GJ. Leg. 590. Informes del Capitán general Marqués de Caylus (1749) “Noticia del mérito, suficiencia y circunstancias que concurren en cada uno de los ministros que componen la Audiencia de este Reyno de Valencia”, y de los regentes Juan de Isla, y Marcos Jimeno Rodríguez.
59. AHN. Consejos. Leg. 18.217. Representación del Príncipe de Campoflorado sobre la falta de ministros en la Sala criminal de la Audiencia de Valencia. También AGS. GJ. leg. 138. El Regente de la Audiencia al Obispo Gobernador del Consejo, sobre el estado de la Sala del Crimen.
60. ARV. Real Acuerdo. Libro 28, fol. 13. Su viuda obtuvo del tribunal una ayuda de 100 libras para ayudar a los gastos de funeral.
61. La jubilación de Vicente Ferrer en AGS, GJ. Leg. 158. La de Alvarado y Muñoz en AGS. GJ. Leg. 160. El regente de la Audiencia al conde de Aranda, gobernador del Consejo. 29 febrero 1772. ARV. R. A. Libro 67, fols. 827-828
62. AHN. Consejos suprimidos. Leg. 18.214. AGS. GJ. Leg. 149.
63. MOLAS, *Estudis*, 1988, pp. 19-21.